



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: SILVIA ELENA BERNAL ARIAS
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 015 2022 00446 01
Sentencia: S-347

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por la apoderada de **PROTECCIÓN S.A.** y en grado jurisdiccional de **CONSULTA** a favor de **COLPENSIONES**, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 08 de septiembre de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

SILVIA ELENA BERNAL ARIAS demandó a COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo que se declare la ineficacia del

traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, debiéndose tener para todos los efectos que continúa afiliada al Régimen de Prima Media al que pertenecía antes.

Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a PROTECCIÓN S.A. a devolver a COLPENSIONES todas las sumas de dinero, bonos, cotizaciones, sumas adicionales recibidas por concepto de aportes obligatorios y rendimientos devengados durante el tiempo en que los dineros estuvieron en poder de la administradora privada; y que se condene en costas a las entidades demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones que se afilió inicialmente al RPM; que se trasladó al RAIS administrado por PROTECCIÓN S.A el día 30 de mayo de 1994, entidad en la cual se encuentra actualmente; que al momento del traslado al RAIS, la AFP omitió su deber de información sobre las consecuencias que producía el traslado de régimen y las diferencias entre ambos regímenes, puesto que solo se le manifestó que en dicho fondo tendría más beneficios económicos, como mejor rentabilidad, una pensión más favorable de la obtenida en el RPM, y que el ISS tendía a desaparecer; que el fondo privado no cumplió con sus obligaciones y que esto la indujo a error; que el día 7 de junio de 2022, presentó derecho de petición frente a COLPENSIONES solicitando el retorno a la entidad, el cual fue resuelto desfavorablemente; que le solicitó a PROTECCIÓN S.A. su proyección pensional, la cual arrojó una mesada inferior a la que obtendría en el RPM; y que con esta diferencia entre ambas mesadas, le genera un perjuicio.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, **COLPENSIONES** dice que es cierto la afiliación al RPM y la respuesta desfavorable a la demandante de la solicitud presentada;

y frente a los demás hechos, indica que no le constan en razón a que son ajenos a la entidad y que no son hechos sino apreciaciones jurídicas. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones en razón a que el traslado fue de forma voluntaria y consciente. Como excepciones de mérito propone carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntariamente indexados, buena fe, improcedencia de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. en su contestación de demanda, señala que es cierto la solicitud presentada por parte de la demandante a la entidad; que no es cierto el traslado realizado desde el RPM al RAIS, puesto que la afiliación realizada al fondo fue inicial, que tampoco es cierto la omisión del deber de información al momento del traslado, pues los asesores brindaron información suficiente sobre todo el sistema general de pensiones, explicando las características propias de cada régimen, sumado a que por parte del fondo no se le causaron perjuicios a la parte actora, pues el traslado fue de forma libre y voluntaria. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones en razón a que el acto de traslado es un acto existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Como excepciones de mérito propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP e inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad e ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe e inexistencia de afiliación previa al régimen de prima media.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 08 de septiembre de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia del traslado de la demandante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual; **CONDENÓ** a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES** las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la actora, esto es, las cotizaciones, junto con los bonos pensionales, si hay lugar a ellos, y rendimientos financieros, sin incluir otros conceptos que no fueron solicitados en la demanda; **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a recibir las sumas de dinero trasladadas por **PROTECCIÓN S.A.**, y activar la afiliación de la demandante en el RPM, en forma permanente y sin solución de continuidad; **ABSOLVIÓ** a **PROTECCIÓN S.A.** del pago de las sumas adicionales del asegurado que se hayan generado con sus frutos e intereses; y **CONDENÓ** en costas a la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de **PROTECCIÓN S.A.** solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, puesto que considera que la demandante se afilió por primera vez al RAIS, por lo que no tiene razón la nulidad de la afiliación de la demandante, debido a que la misma se realizó como vinculación inicial, más no como un traslado de régimen, trayendo para el caso una sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en donde se absuelve a las demandadas, debido a que no existe una afiliación anterior al Sistema General de Pensiones, toda vez que la consecuencia jurídica de la ineficacia es que las cosas retornen al estado inicial en el que se encontraban antes de la afiliación al RAIS, y al no existir situación anterior como en el presente caso, acarrearía que la parte demandante se quede en el estado anterior, es decir, sin vinculación al sistema de pensiones, siendo una situación gravosa para la demandante, la cual afectaría su derecho constitucional de acceder a la

seguridad social, teniendo en cuenta que la demandante no puede escoger el régimen debido a que se encuentra inmersa en la prohibición de la que trata el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

De igual forma, se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta**, en las condenas adversas a COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el respectivo traslado, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. SILVIA ELENA BERNAL ARIAS nació el 03 de febrero de 1971¹; *ii)* y que el 30 de mayo de 1994² suscribió solicitud de vinculación ante PROTECCIÓN S.A. entidad en la que se encuentra vinculada actualmente.

En lo que se refiere al recurso de apelación de PROTECCIÓN S.A., lo primero que se debe precisar, es que NO se está en este caso en presencia de una petición de ineficacia de la afiliación primigenia al régimen o lo que es lo mismo, de la primera vinculación al sistema de pensiones del trabajador que apenas se incorpora a la fuerza económicamente activa, sino por el contrario nos encontramos ante

¹ Folio 24 de la demanda y 64 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

² Folios 35 de la demanda.

una real ineficacia de un traslado desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS - al Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD –, como lo señaló la juez.

Si bien el historial de vinculaciones del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-³ no reporta como administradora de origen a COLPENSIONES o al extinto ISS, el resumen de historia laboral de folios 44 y 45 de la contestación de PROTECCIÓN S.A. indica todo lo contrario, ya que la demandante tiene una vinculación laboral del 10 al 31 de diciembre de 1990 y del 1 al 9 de enero de 1991, para el empleador CORRER S.A. con NIT 2036111274-13, y afirma la demandante en su interrogatorio que realizó cotizaciones al Seguro Social, y aunque PRFOTECCIÓN S.A. en su historia generada el 21 de noviembre de 2022, no registra semanas en otro régimen como se observa de folios 63, esto posiblemente se debe a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 115, en el sentido de que la actora no tendría derecho al bono pensional del extinto ISS, pues al momento del traslado no había cotizado más de 150 semanas.

Por lo anterior, para la Sala, al igual que lo indicó la juez, el presente asunto se rige bajo la figura de la ineficacia del traslado y no como una afiliación inicial al sistema pensional, no obstante, en el caso de ser una afiliación inicial, la mayoría de los magistrados que componen esta Sala, también dan aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora, teniendo claro lo anterior, la diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto

³ Folio 42 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁴, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en*

⁴ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”

cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y

como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera

que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen, se traslado a PROTECCIÓN S.A. en el año 1994, cuando laboraba en INDUSTRIAS JEUNESSE LTDA., en donde llegaron unos asesores del fondo e hicieron una reunión con todos los empleados, y les informaron a todos los asistentes que se trasladaran debido a que este fondo era mejor, que se podían pensionar a cualquier edad, y que el ISS se iba a acabar, siendo esta supuesta asesoría brindada muy rápida en donde solo se firmó el formulario de afiliación, sin explicación de las características propias del RAIS.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, pero sin incluir lo relacionado con las cuotas y/o gastos de administración, aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima y el valor de los seguros previsionales, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

(...)

En consecuencia, la decisión deberá ser **MODIFICADA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la señora SILVIA ELENA BERNAL ARIAS estuvo vinculada a esa entidad, incluyendo, como debe ser, las cuotas y/o gastos de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Se advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos de cuotas de administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y las sumas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, deben incluir la respectiva **indexación**, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones,

esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la orden de la a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor de la actora, tal decisión resulta imprecisa, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será **precisada**.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA, MODIFICADA, PRECISADA y ADICIONADA**.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 08 de septiembre de 2023; pero **1)** la **MODIFICA** en el sentido de **ORDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES**, además de los conceptos ya señalado por la juez, también lo referente a los gastos de administración, seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; **2)** se **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.**, que todos los conceptos trasladados deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Y **3)** se **PRECISA** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, en favor de la demandante, la devolución del importe correspondiente debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **13209180c5fa1f0f03243b415d6b8f998dfdb8a08f54fbb221ccdb6a1acc28f7**

Documento generado en 07/12/2023 01:43:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>